

2026



UNICEF Argentina/S. Avila

Crece en Argentina:

panorama provincial
de la infancia



unicef 

para cada infancia

Dirección editorial

María Elena Úbeda Castillo

Representante Adjunta de UNICEF.

Coordinación general

Sebastián Waisgrais

especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF.

Revisión y supervisión de contenidos

Carolina Aulicino y Alejandra Beccaria

UNICEF.

El presente documento contó con los valiosos aportes de especialistas y oficiales de la oficina de UNICEF en Argentina.

© **Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), agosto de 2026.**

Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia.

Primera edición, Agosto de 2026.

Diseño y Diagramación

Florencia Zamorano

Coordinación editorial

María Elena Úbeda Castillo

Matías Bohoslavsky

Cita sugerida

UNICEF (2026). Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia. Primera edición, agosto de 2026. UNICEF Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando no sean alterados, se asignen los créditos correspondientes y no sean utilizados con fines comerciales.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

buenosaires@unicef.org

www.unicef.org.ar

Tabla de contenido

	Resumen ejecutivo	3
1	Una mirada integral sobre la niñez y la adolescencia	5
2	¿Qué es el Índice Provincial de la Niñez y qué dimensiones aglutina?	7
3	La situación actual de las jurisdicciones de Argentina	10
4	¿Cómo cambió la situación entre 2016 y 2025?	13
	La evolución general	13
	Los cambios en los valores por jurisdicción	14
	El tramo final del período: 2024-2025	16
5	Cuatro dimensiones, distintas prioridades	18
	Evolución general	18
6	Un mismo índice, distintas combinaciones	23
7	Cómo puede utilizarse el IPN para orientar políticas públicas	26
8	Principales mensajes y próximos pasos	30
	Anexo 1	
	Diseño conceptual y metodología	32
	Anexo 2	
	Dimensiones por provincia (2025)	37

Resumen ejecutivo

Crece en Argentina: *Panorama provincial de la infancia* es un documento que busca informar la situación en la que viven niñas, niños y adolescentes en el país. Para ello, se elaboró una herramienta de análisis denominada Índice Provincial de Niñez que reúne, en una sola medida, datos sobre cuatro dimensiones centrales: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Su propósito es ofrecer una mirada general sobre las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes en las provincias argentinas, hacer visibles las desigualdades territoriales y brindar una herramienta común para orientar políticas públicas, seguir trayectorias y analizar avances a lo largo del tiempo.

La edición correspondiente a 2025 muestra un país con diferencias provinciales marcadas. El promedio nacional del índice alcanza un valor de 0,630 en la escala que va de cero a uno, pero esa cifra resume situaciones muy heterogéneas. Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires se ubican en el extremo superior, mientras que Formosa registra el valor más bajo. Entre ambos extremos aparece una estructura escalonada, con una fuerte presencia de provincias patagónicas por encima del promedio nacional y una concentración de jurisdicciones del norte por debajo. El lugar de residencia continúa asociado, por lo tanto, con diferencias considerables entre las niñas, niños y adolescentes en lo referido a las condiciones económicas, las oportunidades educativas, los resultados sanitarios y la incidencia del embarazo en niñas menores de 15 años.



UNICEF Argentina/J. Brasesco

La comparación entre 2016 (año base) y 2025 muestra, al mismo tiempo, una evolución general favorable. El promedio nacional aumenta y 22 de las 24 jurisdicciones alcanzan al final del período un valor superior al registrado al comienzo. Varias provincias que partían de posiciones bajas o intermedias lograron avances importantes. Sin embargo, la mejora extendida no produjo todavía un cierre sustantivo de las brechas territoriales. Las provincias avanzaron desde puntos de partida distintos y con velocidades diferentes, mientras que las jurisdicciones mejor posicionadas también continuaron mejorando.

La apertura del índice por dimensiones permite comprender por qué provincias con resultados globales semejantes pueden enfrentar desafíos muy diferentes. La educación presenta el valor agregado más bajo y una evolución débil durante buena parte del período. La dimensión económica muestra una recuperación importante en el tramo final, aunque conserva fuertes desigualdades provinciales. La salud exhibe resultados heterogéneos y refuerza la necesidad de sostener políticas preventivas, vacunación y atención primaria. El embarazo de niñas menores de 15 años, como indicador proxy de violencia hacia las niñas menores de 15 años, muestra una reducción generalizada, aunque persisten diferencias considerables entre jurisdicciones.



UNICEF Argentina/J. Brasesco

El índice permite así pasar del ordenamiento territorial al diagnóstico de política pública. Su valor general muestra la posición relativa de cada provincia. Las dimensiones identifican las áreas que explican esa situación, y la trayectoria permite reconocer avances, estancamientos y retrocesos. Utilizado de manera periódica, puede contribuir a definir prioridades territoriales, coordinar acciones entre sectores y niveles de gobierno, establecer metas y fortalecer el seguimiento de una agenda federal orientada a reducir las desigualdades en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.

1

Una mirada integral sobre la niñez y la adolescencia

Las condiciones en las que crecen niñas, niños y adolescentes dependen de múltiples aspectos de la vida social. Los recursos disponibles en sus hogares, las oportunidades educativas y la calidad de los aprendizajes, el acceso a la salud y la exposición a algunas formas de violencia influyen de manera simultánea sobre sus posibilidades presentes y futuras. Cada una de estas dimensiones aporta información relevante, pero ninguna alcanza por sí sola para describir la situación de la niñez y la adolescencia en un territorio.

Habitualmente, estos temas se analizan por separado. Las estadísticas económicas muestran la incidencia de la pobreza extrema o las diferencias de ingresos; los indicadores educativos informan sobre la asistencia, la terminalidad, los aprendizajes y el uso de TICS; los datos sanitarios permiten conocer la mortalidad, el peso al nacer o la cobertura de vacunación; y otros registros dan cuenta de situaciones que comprometen la integridad y el desarrollo de las personas durante las primeras etapas de la vida. Esta información resulta indispensable para conocer cada problema, aunque su fragmentación y parcialización no permiten construir una visión general, ni comparar la situación de las provincias.

El documento Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia permite, a través del Índice Provincial de Niñez (IPN), reunir esas distintas miradas. El propósito de este índice es ofrecer una medida sintética que permita observar, bajo un mismo marco, cómo se combinan las **condiciones materiales, educativas, sanitarias y vinculadas con la violencia en cada jurisdicción argentina.** El IPN convierte información proveniente de distintas fuentes en una escala común, de manera que los resultados puedan compararse entre provincias y seguirse a lo largo del tiempo.

Esta mirada integrada permite advertir que **provincias con un resultado global semejante pueden enfrentar desafíos muy diferentes.** Una jurisdicción puede mostrar avances educativos y sanitarios, pero conservar importantes dificultades económicas. Otra puede disponer de condiciones materiales relativamente favorables y presentar, al mismo tiempo, déficits en aprendizajes, vacunación o protección frente a la violencia. Conocer estas combinaciones es fundamental para evitar diagnósticos generales que traten como equivalentes situaciones **que requieren respuestas distintas.**

El IPN también permite complementar la fotografía de un momento determinado con el análisis de las trayectorias. La posición actual de una provincia informa sobre su situación relativa, mientras que la comparación a través del tiempo muestra si logró avanzar, si permaneció estable o si se amplió su distancia respecto de otras jurisdicciones. Ambas perspectivas son necesarias. Una provincia puede continuar situada en una posición rezagada y, sin embargo, haber realizado progresos importantes. Del mismo modo, una posición favorable puede ocultar dificultades recientes en alguna de las dimensiones consideradas.

El objetivo del índice consiste, por lo tanto, en **contribuir a una lectura más completa de las desigualdades territoriales que atraviesan la niñez y la adolescencia en la Argentina.** Su utilidad excede la elaboración de un ordenamiento provincial. Al mostrar las dimensiones preponderantes para cada resultado dentro de cada jurisdicción, **ofrece una herramienta para identificar prioridades, orientar políticas públicas y monitorear sus resultados.** Permite reconocer dónde se concentran las principales brechas, en qué áreas se registran avances y cuáles requieren esfuerzos adicionales o una mejor coordinación entre distintos sectores del Estado.

La construcción de una medida común puede favorecer el diálogo entre la Nación y las provincias.

Las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes involucran organismos, niveles de gobierno y áreas de intervención diferentes.

Contar con un instrumento compartido facilita la definición de metas, el seguimiento de compromisos y el intercambio de experiencias entre jurisdicciones. El índice busca aportar una base de información accesible para ese proceso, una herramienta que sintetice la situación general sin perder de vista que detrás de cada valor existen realidades territoriales específicas y campos concretos de acción pública.



El IPN permite contar con una medida integrada y estable de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en todas las provincias. **Disponer de una métrica común y comparable mejora la calidad del diagnóstico y fortalece la capacidad institucional para monitorear avances en el tiempo.** La estabilidad técnica del índice constituye una base concreta para sostener políticas públicas orientadas por evidencia y no por lecturas fragmentadas o coyunturales¹.

¹ Este índice permite la comparación entre provincias, pero no desconoce que, en su interior, las jurisdicciones tienen disparidades internas (distintos tamaños y densidades poblacionales, composición sociodemográfica, peso de ruralidad, población indígena, etc.).

2

¿Qué es el Índice Provincial de la Niñez y qué dimensiones aglutina?

El IPN reúne en una sola medida sencilla **información sobre cuatro dimensiones centrales**:



Condiciones materiales



Educación



Salud



Violencia

El punto de partida del índice es el reconocimiento de que las posibilidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes dependen de la combinación de esas condiciones y de la forma en que se refuerzan o contrarrestan entre sí. El índice permite observar esa combinación en cada provincia y ofrece una referencia común para comparar situaciones territoriales que, hasta ahora, aparecían representadas mediante conjuntos separados de estadísticas.

Cada una de las cuatro dimensiones se construye empíricamente a través de indicadores que describen aspectos concretos de la realidad². La dimensión de **condiciones materiales** considera los recursos disponibles en los hogares, la incidencia de la pobreza monetaria extrema y la presencia de necesidades básicas insatisfechas. La dimensión **educativa** incorpora la asistencia escolar en edades especialmente relevantes, la finalización de la escuela secundaria, los desempeños escolares y el uso de herramientas digitales. La dimensión de **salud** reúne información sobre mortalidad infantil evitable, bajo peso al nacer y cobertura de vacunación. Finalmente, la dimensión de **violencia** incorpora el embarazo de niñas menores de 15 años³. En conjunto, estos indicadores permiten aproximarse a distintas condiciones que acompañan las trayectorias de vida desde la primera infancia hasta el final de la adolescencia. Cabe señalar que se asigna igual peso a cada dimensión y a cada variable que compone la misma, ya que el objetivo es orientar análisis más detallados y la acción en cada jurisdicción.

2 La selección de los indicadores también responde a la disponibilidad de fuentes de información oficiales, periódicas y con desagregación a nivel provincial.

3 En este caso, y frente a los desafíos de contar con estadísticas actualizadas y desagregadas a nivel provincial referida a situaciones de violencia, teniendo en cuenta que el embarazo adolescente en la gran mayoría de los casos es resultado de abusos.

La selección combina información sobre las condiciones presentes de los hogares con resultados que expresan procesos acumulados.

La pobreza extrema o los ingresos familiares reflejan las posibilidades materiales con las que cuentan niñas, niños y adolescentes en un momento determinado. La terminalidad educativa, los aprendizajes, la mortalidad evitable o el bajo peso al nacer condensan, en cambio, experiencias más prolongadas y muestran hasta qué punto los recursos familiares, las instituciones y las políticas públicas consiguen traducirse en resultados efectivos. Esta combinación amplía la capacidad del índice para mostrar tanto las restricciones inmediatas como algunos de sus efectos sobre las trayectorias educativas y sanitarias.

Los indicadores utilizados provienen de fuentes oficiales y se expresan

originalmente de maneras muy diferentes. Algunos son porcentajes, otros son tasas y otros representan niveles de ingreso. Para reunirlos, todos se convierten a una escala común que va de 0 a 1. En esa escala, los valores más próximos a 1 representan condiciones relativamente más favorables, mientras que los valores cercanos a 0 indican mayores desafíos⁴. El mismo criterio se aplica a todos los componentes: una mayor asistencia escolar o una cobertura de vacunación más elevada incrementan el valor del índice, mientras que una mayor pobreza extrema, mortalidad evitable o embarazo de niñas menores de 15 años lo reducen.

La escala común permite integrar dimensiones diferentes independientemente de sus unidades de medida. Un valor de 0,6, por ejemplo, no representa un porcentaje de niños que se encuentra en buenas condiciones, ni significa que una provincia haya alcanzado el 60% de una meta general. Expresa la posición alcanzada dentro de una escala construida con referencias comunes. Su principal utilidad reside en hacer comparables los resultados, medir las distancias entre provincias y observar cómo esas distancias cambian a lo largo del tiempo.

Las cuatro dimensiones reciben la misma importancia en el resultado final. Esta decisión reconoce que las condiciones materiales, la educación, la salud y la violencia forman parte de un mismo proceso y que ninguna puede sustituir a las restantes. Esto es compatible con el enfoque desarrollado en la Convención de los Derechos del Niño y la definición de los derechos de las niñas y niños como universales, indivisibles e interdependientes. **Un desempeño favorable en una dimensión puede contribuir a elevar el índice, pero no borra las dificultades presentes en las otras.** Esta característica permite que el valor general sintetice la situación de cada provincia y, al mismo tiempo, obliga a examinar su composición para comprender las fortalezas y desafíos que se encuentran detrás de ese resultado.

4 Para más detalles sobre la metodología del IPN, ver Anexo 1.



El IPN surge así de una secuencia que puede ser descripta de la siguiente manera. Primero se observa el desempeño de cada jurisdicción en los indicadores seleccionados; luego se reúnen esos resultados dentro de las cuatro dimensiones; finalmente, las dimensiones se integran en un único valor. El procedimiento es el mismo para todas las provincias y para todos los años considerados. De esta manera, las diferencias observadas responden a cambios en las condiciones medidas y pueden seguirse mediante una regla común.

La posibilidad de desagregar el resultado constituye una de las principales ventajas del instrumento. El valor final ofrece una síntesis útil para observar el mapa general del país, pero las dimensiones permiten comprender qué hay detrás de esa ubicación. Dos provincias pueden alcanzar puntajes semejantes y requerir políticas muy distintas: una puede necesitar concentrar esfuerzos en la reducción de privaciones materiales, mientras que otra puede enfrentar mayores desafíos educativos, sanitarios o asociados con la violencia. El índice aporta, por lo tanto, una puerta de entrada al diagnóstico. Resume la situación sin dejar de lado los componentes que deben orientar la acción pública.

Esta primera versión **se construye con información disponible para el período 2016 y 2025.** Ese horizonte permite ofrecer una fotografía reciente y, a la vez, examinar la trayectoria de cada jurisdicción durante una década marcada por importantes transformaciones económicas, sociales y sanitarias. **La comparación temporal ayuda a distinguir las diferencias de los cambios más recientes y permite valorar los avances provinciales** aun cuando todavía no hayan producido modificaciones importantes en el ordenamiento general.

3

La situación actual de las jurisdicciones de Argentina

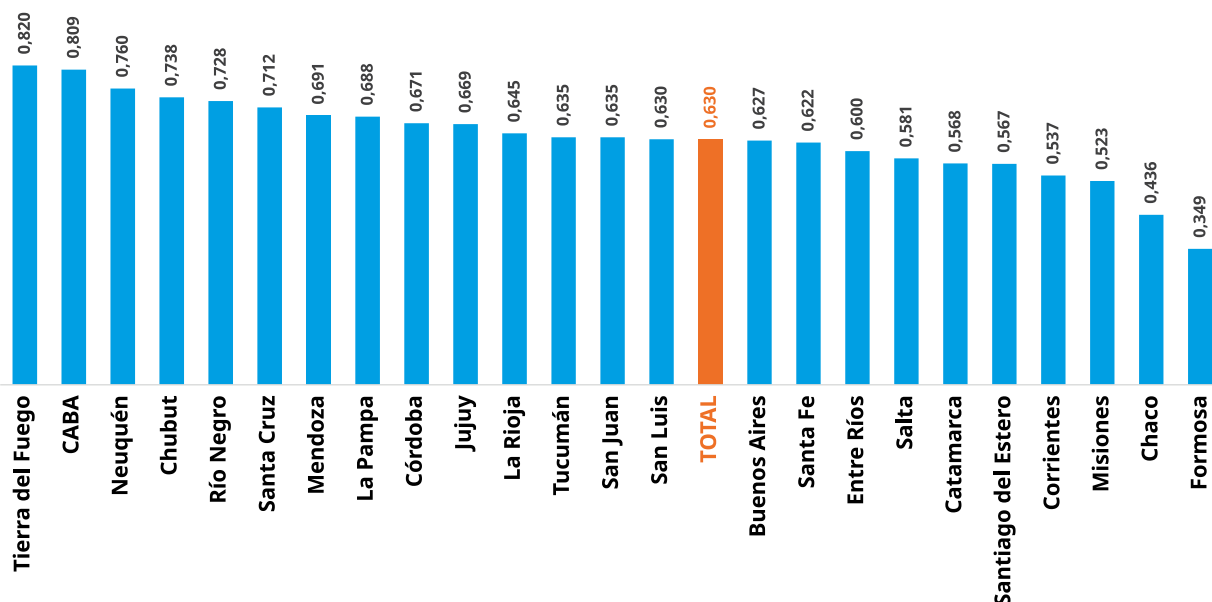
La medición correspondiente a 2025 muestra un país atravesado por diferencias territoriales importantes en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.

El promedio nacional del índice alcanza un valor de 0,630, pero ese resultado resume situaciones provinciales muy diversas. En el extremo superior se ubican Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ambas con valores superiores a 0,8, mientras que Formosa registra el resultado más bajo, con 0,349. La distancia entre estos extremos permite dimensionar la magnitud de las desigualdades territoriales: el lugar donde un niño vive continúa asociado con diferencias considerables en sus condiciones materiales, sus oportunidades educativas, sus resultados sanitarios y las situaciones de violencia.

El panorama provincial presenta una estructura escalonada antes que una separación nítida entre dos grupos (Gráfico 1). Tierra del Fuego y CABA conforman el segmento de resultados más elevados y se encuentran claramente por encima del promedio nacional. A continuación, aparecen Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Mendoza, con valores que oscilan aproximadamente entre 0,69 y 0,76. Este segundo conjunto está integrado principalmente por provincias patagónicas, aunque sus posiciones no responden a una única ventaja compartida: el resultado de cada una surge de combinaciones diferentes entre las cuatro dimensiones. **La concentración de varias jurisdicciones del sur del país en la parte superior del índice constituye, de todos modos, uno de los patrones territoriales más visibles de la medición.**



UNICEF Argentina/J. Brasesco

GRÁFICO 1. Argentina. Índice Provincial de la Niñez por jurisdicciones, 2025

Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

Un amplio grupo de provincias ocupa la zona intermedia. La Pampa, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Tucumán, San Juan, San Luis, Buenos Aires y Santa Fe se sitúan en torno del promedio nacional o relativamente próximas a él. Esta franja **reúne realidades económicas y sociales muy distintas** y muestra por qué el valor general debe complementarse con el examen de las dimensiones. Provincias que alcanzan niveles semejantes en el índice pueden hacerlo a partir de fortalezas diferentes, y también pueden compartir una posición similar pese a enfrentar restricciones muy distintas. La ubicación en el tramo medio ofrece una primera referencia, pero la definición de prioridades de política pública exige conocer la composición interna de cada resultado.

En la parte inferior se encuentran principalmente provincias del norte argentino. Formosa presenta la mayor distancia respecto del promedio nacional, seguida por Chaco, Misiones y Corrientes. Este patrón refleja la persistencia de desigualdades territoriales que atraviesan varias de las dimensiones consideradas y que se han acumulado durante períodos prolongados. La pertenencia a una misma región, sin embargo, tampoco determina resultados idénticos: Jujuy se sitúa por encima del promedio nacional, mientras que Tucumán se encuentra muy cerca de él. El norte argentino aparece, por lo tanto, como un espacio donde se concentran algunos de los desafíos más profundos, **pero también como una región internamente heterogénea.**

La distancia entre las provincias representa un dato central, aunque el ordenamiento ofrece solamente una primera lectura. La posición de una jurisdicción depende tanto de su propio desempeño como del resultado alcanzado por las demás. Una provincia

puede avanzar en términos absolutos y conservar el mismo lugar si otras evolucionan de manera semejante; también puede cambiar de posición por movimientos relativamente pequeños dentro de una zona donde varias jurisdicciones presentan valores próximos. Por eso, **el índice permite observar el ordenamiento, pero también medir las distancias y analizar la trayectoria recorrida por cada provincia.**

El promedio nacional ayuda a reconocer tres situaciones relevantes para la acción pública. Las provincias situadas por sobre esa referencia pueden aportar experiencias y aprendizajes sobre políticas que produjeron resultados favorables, aunque su ubicación no implica que hayan resuelto todos los desafíos. Las jurisdicciones cercanas al promedio requieren identificar con precisión cuáles de sus dimensiones impulsan el resultado general y cuáles limitan su avance. Las provincias ubicadas a mayor distancia necesitan estrategias capaces de actuar sobre varias restricciones simultáneas, porque sus brechas suelen acumularse y reforzarse entre sí.

Esta lectura **evita transformar el índice en una tabla de ganadores y perdedores.** Las posiciones superiores expresan condiciones comparativamente más favorables, pero no constituyen una meta suficiente ni aseguran resultados igualmente positivos en todas las dimensiones. Del mismo modo, los valores más bajos señalan desafíos que persisten a lo largo del tiempo, pero no describen una realidad inmóvil. El índice ofrece un punto de partida para reconocer la magnitud de las diferencias e indagar qué procesos permitieron que algunas provincias avanzaran más que otras.

La distribución territorial también plantea un desafío de coordinación entre niveles de gobierno. Una parte importante de las políticas comprendidas en el índice depende de las provincias, mientras que otras requieren recursos, normas y programas nacionales o la acción conjunta con los municipios. Las brechas observadas difícilmente puedan reducirse mediante intervenciones aisladas o uniformes. **La información sugiere la necesidad de políticas nacionales sensibles a las desigualdades territoriales y, al mismo tiempo, de estrategias provinciales ajustadas a la combinación específica de problemas presente en cada jurisdicción.**

En síntesis, el mapa de 2025 muestra una Argentina en la que las oportunidades disponibles durante la niñez y adolescencia mantienen una fuerte expresión territorial. La diferencia entre provincias constituye uno de los principales resultados del índice, pero su relevancia para las políticas públicas surge de la posibilidad de pasar del ordenamiento general al diagnóstico particular. Conocer qué lugar ocupa cada jurisdicción es importante; comprender por qué ocupa ese lugar es lo que permite comenzar a modificarlo.

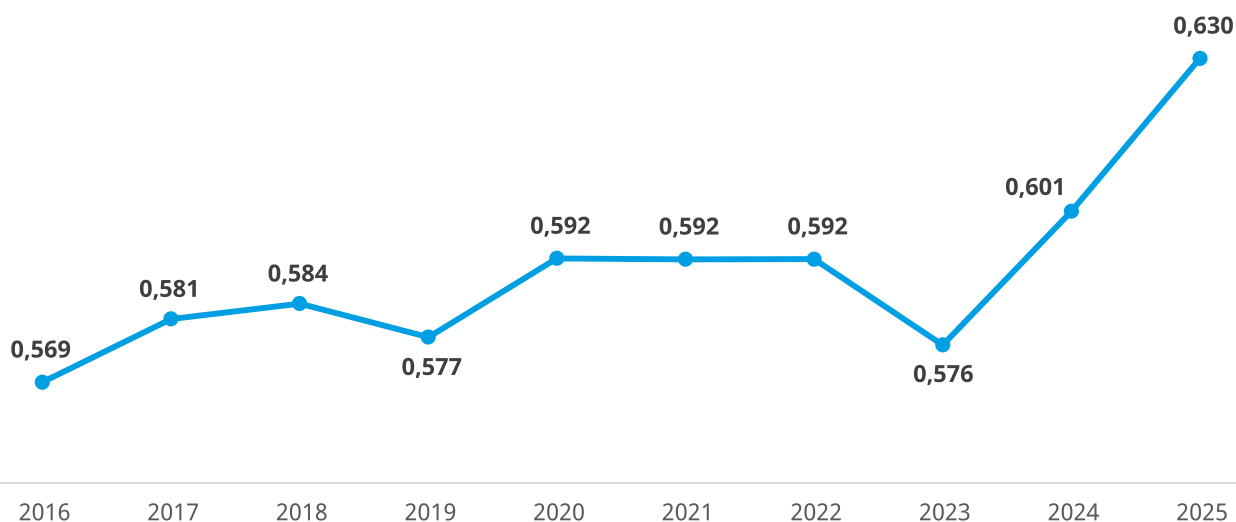
4

¿Cómo cambió la situación entre 2016 y 2025?

La evolución general

La comparación entre 2016 y 2025 muestra una evolución general ascendente del índice. El promedio nacional pasa de 0,569 a 0,630 y 22 de las 24 jurisdicciones registran un valor más alto al final del período. Esta expansión constituye uno de los principales resultados de la medición. Durante una década atravesada por inestabilidad económica, deterioro de los ingresos, una pandemia y fuertes tensiones sobre los servicios públicos, la mayoría de las provincias logró avances en la combinación de condiciones económicas, educativas, sanitarias y vinculadas con la dimensión de violencia.

GRÁFICO 2. Argentina. Evolución del promedio del índice, 2016-2025



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

A pesar de este avance general, **la trayectoria nacional dista de ser lineal**. El índice muestra años de avance, períodos de relativa estabilidad y algunos retrocesos, antes de alcanzar en 2025 su nivel más elevado de toda la serie. Esta evolución irregular resulta coherente con la naturaleza del instrumento. Las cuatro dimensiones responden a procesos diferentes y no se mueven necesariamente en la misma dirección ni con la misma velocidad. Una recuperación de los ingresos puede coincidir con dificultades en educación o salud, mientras que una mejora sostenida en ciertos resultados sociales puede amortiguar el impacto de una coyuntura económica desfavorable. El índice recoge esa combinación y, por eso, su trayectoria expresa el balance entre movimientos que a veces se refuerzan y otras veces se compensan.

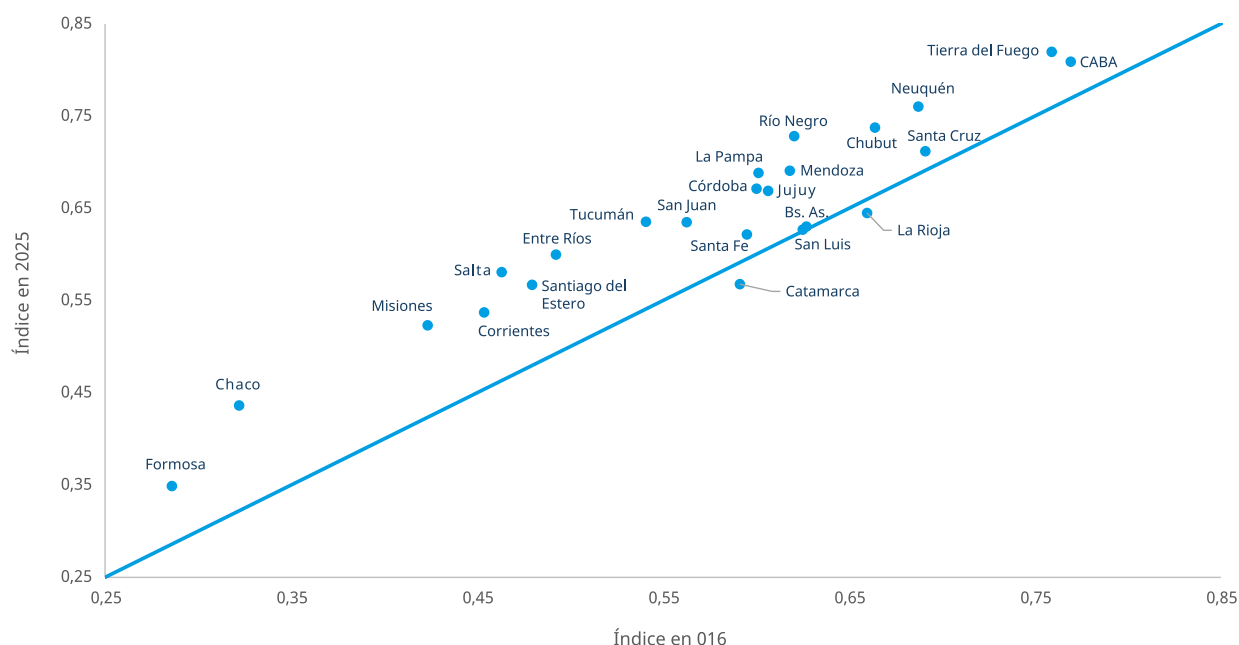


Los cambios en los valores por jurisdicción

El Gráfico 3 compara el valor alcanzado por cada jurisdicción en 2016 y 2025. La recta de 45 grados representa una situación sin cambios entre ambos años. Las jurisdicciones ubicadas por encima de ella registraron un aumento del índice, mientras que las situadas por debajo presentaron una disminución. Cuanto mayor es la distancia respecto de la recta, mayor es la magnitud del cambio.

El mayor aumento se registra en Chaco, cuyo valor pasa de 0,322 a 0,436. También se observan avances importantes en Salta, Misiones, Formosa y Entre Ríos. Estas trayectorias muestran que **el progreso no quedó concentrado en provincias que ya ocupaban posiciones más favorables**. Varias jurisdicciones que partían de niveles bajos o intermedios ampliaron su puntaje de manera apreciable, aunque la magnitud de sus avances no siempre alcanzó para cerrar la distancia que las separa del promedio nacional o de las provincias mejor ubicadas.

GRÁFICO 3. Variación del Índice de Provincial de la Niñez entre 2016 y 2025, por jurisdicción.



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

La diferencia entre mejorar y cambiar de posición es central para interpretar estos resultados. El índice de una provincia puede aumentar y, aun así, su lugar en el ordenamiento puede permanecer relativamente estable cuando otras jurisdicciones avanzan con una intensidad semejante. Chaco, por ejemplo, presenta el incremento absoluto más alto del período, pero continúa situado entre los valores más bajos en 2025. Su trayectoria expresa un progreso importante y, al mismo tiempo, la persistencia de una brecha considerable. Ambas afirmaciones son compatibles y deben formar parte del diagnóstico.

La movilidad dentro del ordenamiento fue más visible en algunas provincias. Entre 2016 y 2025, Tucumán avanzó cinco posiciones y La Pampa y Córdoba cuatro. En sentido contrario, San Luis y Buenos Aires retrocedieron siete posiciones. Estos movimientos muestran cambios relativos, pero deben interpretarse junto con la evolución de los puntajes. Buenos Aires y San Luis, muestran valores levemente superiores a los de 2016, aunque avanzaron menos que otras provincias y por eso perdieron posiciones. La Rioja y Catamarca son las únicas jurisdicciones cuyo índice de 2025 es menor al nivel de comienzo de la serie.

La evolución de las provincias que ocupan la parte superior también ofrece una enseñanza relevante. Tierra del Fuego y CABA mantienen las dos primeras posiciones y mejoran sus valores durante el período. Neuquén y Chubut también combinan resultados elevados en 2025 con aumentos respecto de 2016. Esto significa que el avance de las provincias inicialmente rezagadas convivió con mejoras en buena parte del segmento superior. Como consecuencia, el progreso general no produjo un cierre automático de las brechas territoriales: para converger, las jurisdicciones que parten de situaciones menos favorables necesitan avanzar durante períodos prolongados a un ritmo superior al de aquellas que ya presentan mejores condiciones.

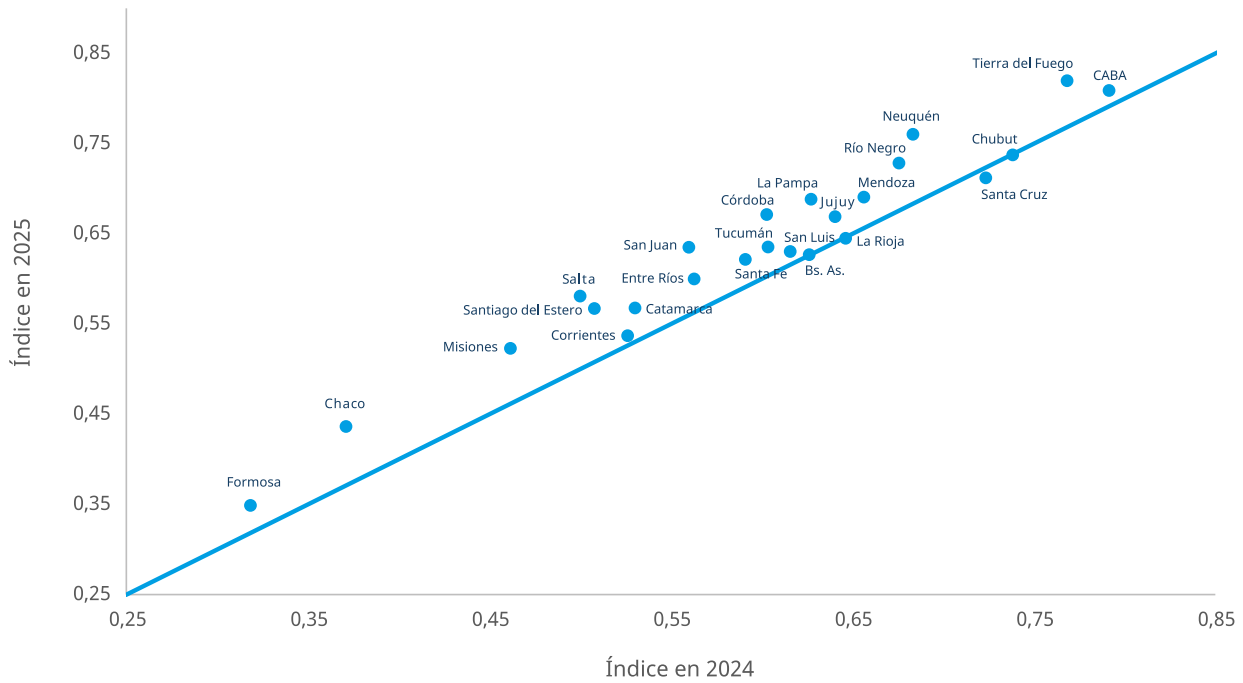
La distancia entre los extremos ilustra esta persistencia. **En 2016, la diferencia entre la jurisdicción con mayor valor y la de menor valor era cercana a 0,5 puntos. En 2025 continúa siendo de una magnitud similar. El nivel general del país aumentó, pero la estructura territorial conserva una marcada desigualdad.** La mejora promedio representa, por lo tanto, una expansión de las condiciones medidas más que una homogeneización del mapa provincial. Las provincias avanzaron desde puntos de partida distintos y con velocidades diferentes, y esas trayectorias no alcanzaron todavía para reducir de manera sustantiva la separación entre los extremos.

El tramo final del período: 2024-2025

El incremento observado en 2024 y 2025 merece una atención particular. Luego de una disminución en 2023, el promedio nacional se recupera en 2024 y registra en 2025 el aumento anual más pronunciado de la serie (Gráfico 2). **Una parte importante de este movimiento proviene de la dimensión de condiciones materiales,** que muestra avances generalizados en el último año, aunque el resultado final también recoge cambios en las otras dimensiones. **La magnitud de esta variación aconseja observar su continuidad en las próximas mediciones.** Un solo año puede marcar el comienzo de una tendencia, pero **la consolidación de una mejora requiere que los resultados se sostengan y se extiendan a los distintos componentes del índice.**

El siguiente gráfico compara el valor del IPN en 2024 con el registrado en 2025 para cada jurisdicción. La línea diagonal representa una situación sin cambios: los puntos ubicados por encima indican que el índice aumentó entre ambos años, mientras que los situados por debajo reflejarían una disminución. La distribución de las observaciones muestra una mejora generalizada, ya que prácticamente todas las jurisdicciones se ubican por encima de la diagonal. El avance fue especialmente visible en Chaco, Salta, San Juan y Misiones que se apartan con mayor claridad de la línea de igualdad. En cambio, otras jurisdicciones, como La Rioja, Chubut o Buenos Aires, presentan variaciones más acotadas y permanecen próximas a la diagonal. Por su parte, Santa Cruz, presenta un menor valor del IPN en 2025, respecto de 2024.

GRÁFICO 4. Variación del Índice Provincial de la Niñez entre 2024 y 2025, por jurisdicción.



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

Las posiciones relativas de 2025 también dependen del nivel desde el cual parte cada jurisdicción. CABA y Tierra del Fuego continúan ocupando la parte superior del gráfico y combinan valores elevados en ambos años con una mejora adicional en 2025. Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz conservan asimismo niveles altos, aunque con incrementos de distinta magnitud. En la zona media se observa una mayor concentración de provincias y, por lo tanto, pequeñas diferencias en la evolución anual pueden traducirse en cambios visibles dentro del ordenamiento. El gráfico permite advertir, en síntesis, que **la mejora entre 2024 y 2025 fue extendida, pero también heterogénea: algunas jurisdicciones avanzaron con mayor intensidad**, mientras que otras registraron movimientos más moderados desde posiciones inicialmente diferentes.

5

Cuatro dimensiones, distintas prioridades

Evolución general

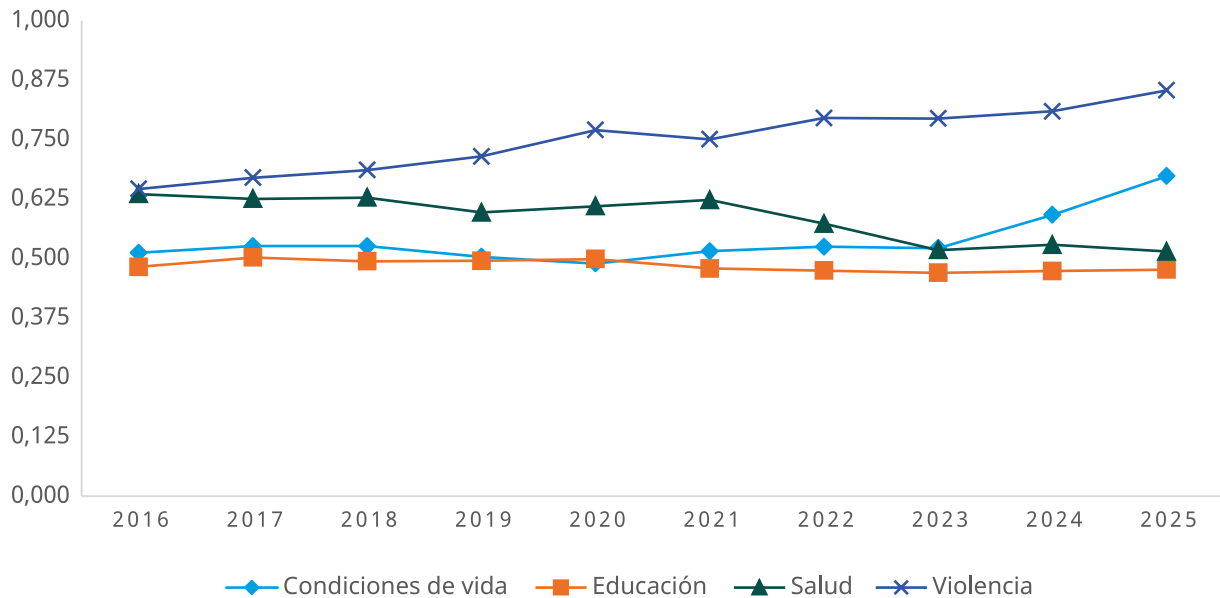
El valor general del índice ofrece una síntesis de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, pero **su mayor utilidad para las políticas públicas aparece cuando se examina cada dimensión**. Las condiciones materiales, la educación, la salud y la violencia describen procesos distintos, responden a políticas diferentes y presentan estructuras territoriales que no siempre coinciden. Abrir el índice permite pasar de la pregunta sobre qué lugar ocupa una provincia a cuestiones aún más relevantes para la acción pública: **qué condiciones ayudan a explicar ese resultado y dónde se concentran sus principales desafíos**.⁵



En 2025, las cuatro dimensiones presentan niveles nacionales diferentes dentro de la escala común. El índice de la dimensión de condiciones materiales alcanza un valor de 0,673; la educación, 0,477; la salud, 0,515; y la dimensión de violencia, 0,854. Estas diferencias deben interpretarse con cuidado, porque cada componente reúne indicadores y referencias propias. Los valores permiten seguir su evolución temporal (Gráfico 4) y/o comparar jurisdicciones dentro de una misma dimensión (Gráfico 5), pero no permiten inferir que el campo de política al que esa dimensión representa haya alcanzado un determinado porcentaje de cumplimiento respecto de otro.

5. Ver Anexo 2 en donde se presenta el valor del IPN de cada jurisdicción, para cada una de las cuatro subdimensiones de análisis.

GRÁFICO 5. Evolución de los promedios nacionales del índice en las cuatro dimensiones



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

La **dimensión de condiciones materiales** reúne el ingreso familiar por persona, la pobreza monetaria extrema (indigencia) y las necesidades básicas insatisfechas. En 2025 muestra una mejora considerable respecto del año anterior y alcanza el valor más alto de toda la serie. CABA, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz presentan los resultados más favorables, mientras que Chaco, Santiago del Estero y Corrientes permanecen en la parte inferior. La recuperación reciente es amplia y alcanza a todas las jurisdicciones, pero se produce sobre una estructura territorial muy desigual. Esto indica que una mejora general de los ingresos puede elevar las condiciones materiales del conjunto sin eliminar las diferencias acumuladas. La lectura de esta dimensión remite a políticas de alcance nacional y provincial. La evolución del empleo, los salarios, las transferencias de ingresos y los precios influyen directamente sobre los recursos disponibles en los hogares. Al mismo tiempo, las necesidades básicas insatisfechas expresan privaciones estructurales, vinculadas con la vivienda, la infraestructura y el acceso a servicios. Por eso, una política orientada únicamente a los ingresos puede producir mejoras importantes y, aun así, dejar pendientes restricciones estructurales que requieren inversión pública sostenida y una intervención territorial más localizada.



UNICEF Argentina/J. Corbalán

La **educación** presenta un panorama diferente. El promedio nacional se mantiene en torno de valores similares durante buena parte de la década y alcanza 0,477 en 2025, apenas por debajo del registrado en 2016. Detrás de esa estabilidad conviven movimientos contrapuestos entre la asistencia, la finalización de la escuela secundaria, los aprendizajes y el acceso a computadoras. Tierra del Fuego y CABA encabezan la dimensión, mientras que Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Misiones registran los valores más bajos. La distancia entre provincias muestra que la expansión del acceso escolar constituye una condición fundamental, pero resulta insuficiente cuando no está acompañada por continuidad de las trayectorias, aprendizajes adecuados y acceso efectivo a recursos digitales.

Este resultado convierte a la educación en una prioridad transversal. Las políticas necesarias exceden la ampliación de vacantes o la recuperación de la asistencia. También involucran el acompañamiento de las trayectorias, la prevención del abandono, la finalización del nivel secundario, el fortalecimiento de los aprendizajes y la reducción de las brechas digitales. La composición del indicador muestra, además, que una jurisdicción puede presentar una asistencia relativamente elevada y mantener dificultades en terminalidad o desempeño. El desafío consiste en garantizar que la presencia en la escuela se transforme en aprendizajes y en la posibilidad efectiva de completar los niveles educativos.



UNICEF Argentina/P. Haar

La dimensión de **salud** alcanza un valor nacional de 0,515 en 2025 y se ubica por debajo del registrado al comienzo del período. Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut y Jujuy presentan los resultados más favorables, mientras que Formosa, Corrientes y Chaco se encuentran en el extremo inferior. La combinación de mortalidad infantil evitable, cobertura de vacunación y bajo peso al nacer permite observar tanto la capacidad preventiva del sistema sanitario como los resultados asociados con la atención materno-infantil y las condiciones de gestación y nacimiento.

La evolución de esta dimensión advierte sobre la necesidad de sostener políticas que suelen producir resultados de manera acumulativa. La reducción de la mortalidad evitable requiere controles prenatales, atención oportuna, infraestructura sanitaria y capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo. La vacunación depende de la continuidad de las campañas, la disponibilidad de insumos, la confianza de las familias y la capacidad de llegar a poblaciones territorialmente dispersas. El bajo peso al nacer, por su parte, expresa condiciones de salud, nutrición y cuidado que comienzan antes del nacimiento. Las diferencias provinciales muestran que los resultados sanitarios dependen de la articulación entre atención primaria, hospitales, políticas alimentarias y estrategias de búsqueda activa de la población.

La cuarta dimensión requiere una lectura más acotada. En la versión actual del índice está representada por el embarazo de niñas menores de 15 años, de modo que sus resultados describen la evolución de un indicador que releva un aspecto grave de la violencia sexual que padecen niñas y adolescentes mujeres menores de 15 años y no del conjunto de las **violencias** que enfrentan niñas, niños y adolescentes. El promedio nacional alcanza 0,854 en 2025 y muestra una mejora sostenida respecto de 2016. CABA, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz presentan los valores más elevados, mientras que Formosa se ubica a considerable distancia del resto. Chaco, Misiones y Salta también permanecen por debajo del promedio nacional, aunque con

avances importantes durante la década. La reducción del embarazo de niñas menores de 15 años se relaciona con políticas de salud sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral, continuidad educativa y ampliación de proyectos de vida. También exige reconocer que las situaciones agrupadas bajo este indicador pueden responder a contextos sociales y familiares muy diversos. Su incorporación aporta información relevante sobre una dimensión específica de las trayectorias adolescentes. A la vez, la interpretación del índice debe conservar la correspondencia entre lo que efectivamente se mide y las conclusiones que pueden extraerse a partir de esa información.



6

Un mismo índice, distintas combinaciones

El valor general del IPN resume en una sola medida la situación de cada jurisdicción, pero ese resultado puede estar construido a partir de combinaciones diferentes entre condiciones materiales de vida, educación, salud y violencia. Por eso, su lectura requiere distinguir entre la composición interna del índice, es decir, la proporción que representa cada dimensión dentro de la suma de los cuatro componentes, y la magnitud final alcanzada por cada provincia. Ambas perspectivas son complementarias. La primera permite identificar qué dimensiones tienen una presencia relativa mayor o menor dentro de cada jurisdicción; la segunda informa el nivel general obtenido en la escala del índice. Esta distinción resulta central, porque dos provincias pueden presentar composiciones porcentuales semejantes y, sin embargo, alcanzar valores generales muy diferentes.



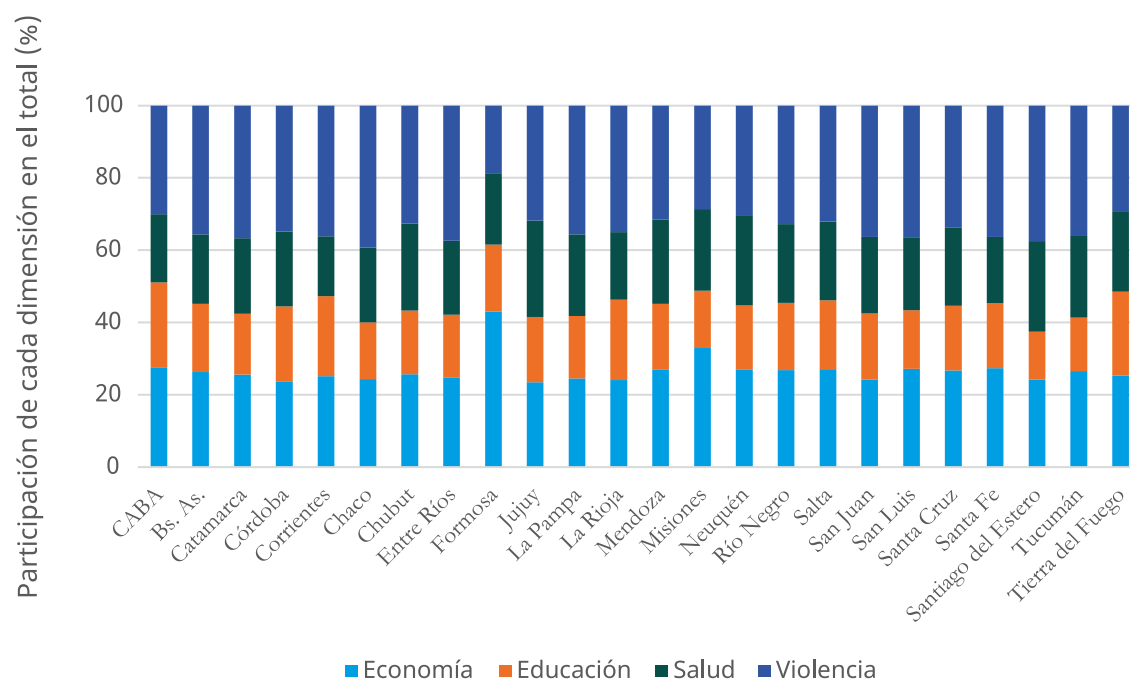
UNICEF Argentina/J. Brasesco



UNICEF Argentina/J. Brasesco

El Gráfico 5 muestra la participación relativa de cada dimensión en la suma de los cuatro puntajes dimensionales. Cada barra representa el 100% de esa suma y permite observar cómo se distribuye entre condiciones materiales de vida, educación, salud y violencia. La comparación de las 24 jurisdicciones revela un patrón marcado: en 22 de ellas, violencia presenta la participación más elevada. Las excepciones son Formosa y Misiones, donde la mayor proporción corresponde a condiciones materiales. Educación, por su parte, constituye la dimensión de menor participación en 20 jurisdicciones; únicamente en CABA, Corrientes, La Rioja y Santa Fe la proporción más reducida corresponde a salud. La regularidad de este resultado muestra que, en la mayoría de las provincias, el puntaje educativo es bajo en relación con los restantes componentes del índice.

GRÁFICO 6. Participación relativa de las dimensiones en la composición del IPN por jurisdicción, 2025



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

La intensidad de estas diferencias varía considerablemente entre jurisdicciones. Tierra del Fuego presenta la composición más pareja: las participaciones oscilan entre el 22,1% correspondiente a salud y el 29,4% de violencia. También CABA muestra una distribución similar. En el extremo opuesto, Formosa presenta una participación de condiciones materiales del 43%, muy superior a la de las restantes dimensiones, que se ubican alrededor del 19%. Misiones también se aparta del patrón predominante, aunque de manera menos pronunciada, debido a que condiciones materiales representa el 33,0% de la suma y supera a violencia, con el 28,7%.

La lectura porcentual permite comparar estructuras, pero no informa por sí sola sobre el nivel alcanzado por cada provincia. Como todas las barras suman 100%, el gráfico iguala visualmente jurisdicciones cuyos valores generales pueden ser muy diferentes. Una distribución relativamente pareja puede surgir tanto de puntajes altos en las cuatro dimensiones como de puntajes bajos y próximos entre sí. Del mismo modo, una elevada participación de una dimensión puede deberse a que presenta un puntaje alto o a que los puntajes de las restantes dimensiones son especialmente reducidos. Por eso, las proporciones deben interpretarse conjuntamente con el valor general del IPN y con los puntajes dimensionales que las originan.



UNICEF Argentina/A. Sanguinetti

Tierra del Fuego ilustra el primer caso: su composición es relativamente homogénea y el valor general del índice alcanza 0,82, como resultado de puntajes elevados en las cuatro dimensiones. Formosa presenta una situación diferente: su IPN es de 0,349 y la elevada participación relativa de las condiciones materiales no expresa un puntaje particularmente alto en términos absolutos, sino su distancia respecto de educación, salud y violencia, cuyos valores son considerablemente menores. La participación porcentual debe entenderse, por lo tanto, como una medida relacional: indica la posición de cada dimensión dentro de la estructura provincial, pero no su nivel absoluto.

La desagregación del IPN permite avanzar desde la posición general de cada jurisdicción hacia una comprensión más precisa de su configuración interna. El valor agregado muestra el nivel relativo alcanzado, mientras que la composición indica cómo se distribuye ese resultado entre las cuatro dimensiones. Consideradas conjuntamente, ambas perspectivas permiten establecer si una provincia presenta resultados relativamente homogéneos, si una dimensión se distancia claramente de las restantes o si un puntaje particularmente bajo limita el valor general del índice. Esta información permite identificar con mayor precisión las dimensiones sobre las cuales deberían concentrarse las intervenciones públicas.

7

Cómo puede utilizarse el IPN para orientar políticas públicas

El IPN fue concebido como una herramienta de apoyo a la política pública. Su utilidad reside en ordenar información dispersa, mostrar de manera comparable las diferencias entre jurisdicciones y ofrecer una referencia común para seguir cambios a lo largo del tiempo. Es necesario tener en cuenta que el índice no reemplaza el conocimiento sectorial ni la evaluación detallada de cada programa. Resume dimensiones diversas y establece un punto de partida compartido desde el cual identificar prioridades, formular preguntas más precisas y orientar la asignación de esfuerzos.

La **primera aplicación consiste en reconocer dónde se concentran las brechas más importantes**. El valor general muestra la situación relativa de cada provincia, mientras que la apertura por dimensiones permite identificar la naturaleza de esas diferencias. Una jurisdicción con dificultades principalmente materiales requiere una estrategia distinta de otra cuyo principal rezago se encuentra en educación o salud. Allí donde los desafíos se acumulan en varias dimensiones, la respuesta necesita ser integral y sostenida, porque las restricciones suelen reforzarse entre sí y limitar el efecto de las intervenciones aisladas.

El índice también ayuda a diferenciar la posición actual de la trayectoria recorrida. Esta distinción es importante para evaluar políticas públicas con mayor justicia y precisión. Una jurisdicción puede continuar debajo del promedio nacional y, al mismo tiempo, haber logrado avances significativos durante los últimos años. Otra puede conservar una ubicación favorable, pero mostrar una evolución débil o un retroceso en alguno de sus componentes. Considerar conjuntamente el nivel y el cambio permite reconocer progresos, detectar señales de alerta y evitar que el análisis quede reducido a un ranking estático.

Una **segunda aplicación es la definición de prioridades territoriales**. Los promedios nacionales suelen ocultar la concentración de determinados problemas en un conjunto reducido de jurisdicciones. El índice hace visibles esas diferencias y permite orientar recursos hacia los territorios donde las brechas son mayores o donde se combinan varias privaciones. Esta focalización territorial puede mejorar la eficacia de las políticas nacionales, siempre que se complemente con información provincial y local que permita identificar los grupos y las áreas más afectados dentro de cada jurisdicción.

En este sentido, el índice puede servir como insumo para priorizar decisiones presupuestarias, concentrar inversiones y asignar asistencia técnica de manera proporcional a la magnitud y composición de los desafíos identificados.

La dimensión territorial también resulta relevante para diseñar políticas sensibles a los puntos de partida. Una meta uniforme puede exigir esfuerzos muy diferentes según la situación inicial de cada provincia. Alcanzar determinados niveles de terminalidad educativa, cobertura de vacunación o reducción de la pobreza extrema requiere plazos, recursos y capacidades institucionales distintas en territorios que parten de condiciones desiguales. El índice permite establecer referencias comunes sin desconocer esas diferencias y favorece la formulación de metas graduales, verificables y ajustadas a las posibilidades y necesidades de cada jurisdicción.

La **tercera aplicación se relaciona con la coordinación entre sectores**. Las condiciones reunidas por el índice dependen de áreas gubernamentales que habitualmente trabajan con estructuras, presupuestos y sistemas de información propios. Economía, desarrollo social, educación, salud, vivienda y protección de derechos intervienen sobre dimensiones que se encuentran estrechamente conectadas en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. La apertura del índice puede ayudar a reconocer esas interdependencias y a construir agendas compartidas alrededor de problemas que difícilmente puedan resolverse desde un solo organismo. Esta coordinación es especialmente necesaria cuando una misma política puede producir efectos sobre varias dimensiones. Una ampliación de la cobertura de jardines de infantes favorece las trayectorias educativas y puede facilitar la inserción laboral de las personas adultas responsables del cuidado. Las políticas de ingresos contribuyen a reducir la pobreza extrema y también pueden mejorar la alimentación, la asistencia escolar y el acceso a controles sanitarios. La continuidad educativa de las adolescentes se vincula con sus oportunidades futuras y con la prevención de embarazos tempranos. El índice ayuda a hacer visibles estas relaciones y a valorar los efectos conjuntos de intervenciones que, administrativamente, suelen pertenecer a sectores diferentes.

Una **cuarta posibilidad de uso es el seguimiento de compromisos**. Al aplicar una misma regla de medición a lo largo del tiempo, el índice permite observar si una provincia avanza, permanece estable o se aleja de los resultados alcanzados por otras jurisdicciones. Este seguimiento puede organizarse alrededor de metas nacionales, acuerdos federales o planes provinciales. La actualización periódica ofrece una base para evaluar el rumbo general, identificar dimensiones que requieren atención y sostener la continuidad de las políticas más allá de las variaciones coyunturales. Para cumplir esa función, los cambios deben interpretarse junto con los indicadores que los producen. Una variación del índice general señala que algo se modificó en la combinación de dimensiones, pero el diagnóstico exige determinar dónde ocurrió el cambio y qué factores pueden explicarlo. La lectura adecuada comienza con el valor

agregado y continúa con las dimensiones y los indicadores específicos. Este recorrido permite evitar conclusiones apresuradas y vincular los resultados con políticas, capacidades institucionales y contextos económicos y sociales concretos.

El índice puede utilizarse además para promover el aprendizaje entre provincias.

Las jurisdicciones que alcanzan buenos resultados en una dimensión determinada pueden ofrecer experiencias relevantes para otras, incluso cuando su situación general sea diferente. Una provincia con avances sostenidos en terminalidad educativa, vacunación o reducción del embarazo en niñas menores de 15 años puede aportar información sobre las estrategias implementadas, las formas de coordinación y las condiciones institucionales que facilitaron esos resultados. La comparación adquiere así un sentido productivo: permite reconocer prácticas potencialmente valiosas sin suponer que puedan trasladarse de manera automática entre contextos diferentes.

Este intercambio requiere evitar la lógica de premiar a las provincias mejor ubicadas y responsabilizar exclusivamente a las más rezagadas. Las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia responden a procesos históricos, estructuras productivas, capacidades fiscales y decisiones de distintos niveles de gobierno. El índice muestra resultados territoriales, pero su interpretación debe considerar que las provincias disponen de recursos y márgenes de acción desiguales. Reducir las brechas requiere combinar responsabilidad provincial, apoyo nacional y mecanismos de cooperación capaces de compensar esas diferencias.



La herramienta también puede contribuir a mejorar la producción de información.

Su construcción obliga a revisar la disponibilidad, periodicidad y comparabilidad de los datos utilizados en cada dimensión. Los vacíos de información, las diferencias en los años de actualización y la dificultad para contar con series homogéneas forman parte del diagnóstico institucional. En este sentido, el índice no solo organiza los datos existentes: también permite identificar qué información falta y dónde resulta necesario fortalecer los registros administrativos, las encuestas y los mecanismos de intercambio entre organismos⁶.

La actualización periódica del índice puede convertirse, por lo tanto, en un incentivo para mejorar la calidad estadística. Contar con indicadores regulares y comparables permite evaluar políticas con mayor precisión, detectar cambios oportunamente y reducir la dependencia de estimaciones aisladas. La calidad de la decisión pública depende en buena medida de la calidad de la información disponible, y la consolidación del índice puede contribuir a sostener una agenda de fortalecimiento de los sistemas provinciales y nacionales de datos. El uso del índice debe mantener, finalmente, una relación equilibrada entre síntesis y detalle. Su valor general facilita la comunicación y ofrece una imagen del mapa territorial, pero las decisiones públicas deben apoyarse en el análisis de las dimensiones, los indicadores y las particularidades de cada provincia. La síntesis sirve para orientar la mirada; el detalle permite diseñar la intervención. La fortaleza del instrumento radica precisamente en articular ambos niveles y en ofrecer un recorrido ordenado desde la comparación general hasta la identificación de prioridades concretas.



Utilizado de esta manera, el índice puede contribuir a que las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes se apoyen en diagnósticos más integrales, metas más claras y mecanismos de seguimiento más estables. También puede favorecer una discusión federal centrada en resultados, trayectorias y brechas específicas. Su aporte principal consiste en transformar un conjunto amplio de estadísticas en una estructura común para la acción: muestra dónde se encuentran las mayores desigualdades, qué dimensiones requieren atención y cómo evoluciona cada territorio frente a esos desafíos.

6 En esta línea, se destaca que, en el caso de la dimensión de violencia, se registra una carencia de indicadores que permitan monitorear la situación de la niñez y adolescencia. Por esta razón, se decidió solamente utilizar el indicador referido a al embarazo de niñas menores de 15 años.

8

Principales mensajes y próximos pasos

El IPN ofrece una mirada integrada sobre las desigualdades territoriales que atraviesan a las provincias argentinas. Al reunir información económica, educativa, sanitaria y vinculada al embarazo de niñas menores de 15 años, permite observar cómo se combinan distintas condiciones que influyen sobre las trayectorias de niñas, niños y adolescentes. **Su principal aporte consiste en transformar un conjunto disperso de estadísticas en una medida común, comparable y abierta a la desagregación.**

Los resultados muestran una **mejora general entre 2016 y 2025**. El promedio nacional aumenta y 22 de las 24 jurisdicciones alcanzan al final del período un valor superior al registrado al comienzo. Esta evolución **sugiere que las condiciones reunidas por el índice pueden modificarse y que los avances no estuvieron limitados a las provincias inicialmente mejor posicionadas**. La mejora extendida **convivió con brechas territoriales profundas**. La distancia entre las provincias ubicadas en los extremos del índice continúa siendo amplia y la estructura general del mapa mantiene un patrón que persiste. El aumento en el valor del índice nacional expresa una expansión de las condiciones medidas, pero todavía no se presenta como un proceso sostenido de convergencia territorial.

El análisis por dimensiones muestra, además, que las provincias llegan a posiciones semejantes mediante combinaciones diferentes. Algunas presentan mayores restricciones económicas; otras concentran sus desafíos en educación, salud o embarazo de niñas menores de 15 años. Esta diversidad impide reducir el diagnóstico a una única clasificación y señala la necesidad de políticas ajustadas a cada perfil provincial. **El ordenamiento permite ubicar; la desagregación permite comprender; la trayectoria permite evaluar.** La educación aparece como uno de los principales desafíos transversales, debido a su bajo valor agregado y a la débil evolución observada durante buena parte del período. La dimensión económica muestra una recuperación importante en el tramo final, aunque conserva diferencias provinciales muy marcadas. La salud presenta resultados heterogéneos y subraya la necesidad de sostener políticas preventivas y de atención primaria. La reducción del embarazo de niñas menores de 15 años constituye uno de los avances más extendidos de la década, aunque las brechas entre jurisdicciones continúan siendo significativas.

Estos resultados refuerzan la necesidad de una agenda federal capaz de combinar referencias comunes con respuestas territoriales diferenciadas. **Las jurisdicciones requieren metas y políticas acordes con sus puntos de partida, sus capacidades institucionales y la composición específica de sus brechas. La Nación, por su parte, cumple un papel central en la compensación de desigualdades, la provisión de recursos, la definición de estándares y la coordinación de políticas que atraviesan distintos sectores y niveles de gobierno.** La consolidación del índice exige sostener una actualización periódica, revisar la calidad y regularidad de sus fuentes y ampliar progresivamente la información disponible. También requiere preservar reglas de medición estables que permitan distinguir cambios reales de variaciones derivadas de modificaciones metodológicas. La continuidad del instrumento aumentará su capacidad para identificar tendencias, evaluar compromisos y fortalecer el aprendizaje entre provincias.

Por último, es fundamental fortalecer la disponibilidad de fuentes de información que permitan mejorar la periodicidad de las mediciones y la comparabilidad entre jurisdicciones, especialmente en aquellas dimensiones donde la evidencia disponible continúa siendo limitada. Contar con datos oportunos, confiables y comparables resulta clave para realizar diagnósticos más precisos, monitorear la evolución de las brechas territoriales y orientar la toma de decisiones basada en evidencia.

El índice debe entenderse, en definitiva, como una herramienta para orientar la acción pública. Su valor reside menos en establecer una posición definitiva para cada jurisdicción que en mostrar dónde se encuentran las mayores brechas, qué dimensiones explican esas diferencias y cómo evoluciona cada provincia frente a ellas. **La evidencia reunida indica que avanzar es posible, pero también que el cierre de las desigualdades territoriales demanda políticas sostenidas, coordinación federal y una atención continua** a las condiciones concretas en las que crecen niñas, niños y adolescentes en cada parte del país.



UNICEF Argentina/M. Tucuna

Anexo 1

Diseño conceptual y metodología

Principios rectores

El IPN es una herramienta de monitoreo destinada a describir y comparar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en las 24 jurisdicciones argentinas mediante reglas metodológicas explícitas y estables. Su diseño parte del reconocimiento de que la educación, la salud, las condiciones materiales de vida y las situaciones comprendidas en la dimensión de violencia responden a procesos que se desarrollan en el mediano plazo y cuya evolución difícilmente pueda interpretarse a partir de variaciones aisladas. En consecuencia, el índice prioriza la consistencia intertemporal y la comparabilidad territorial, entendiendo que la solidez de la medición depende de la estabilidad de sus criterios y parámetros.

El enfoque es multidimensional e integra cuatro ámbitos: economía, educación, salud y violencia. La selección combina indicadores de condiciones materiales, coberturas y resultados relevantes para las trayectorias de niñas, niños y adolescentes. El índice ofrece una medida sintética de esas dimensiones y conserva, al mismo tiempo, la posibilidad de abrir el resultado general para identificar las características particulares de cada jurisdicción.

Unidad de análisis y cobertura

La unidad de análisis es la jurisdicción, entendida como la unidad político-administrativa en la que se agregan los indicadores correspondientes a cada dimensión. Aunque la información de base proviene de registros y relevamientos realizados sobre personas, hogares, nacimientos o establecimientos educativos, el índice expresa resultados territoriales promedio y no situaciones individuales. Sus variaciones deben interpretarse, por lo tanto, como cambios en las condiciones agregadas de cada jurisdicción y no como transformaciones uniformes que afecten de manera idéntica a todas las personas o los hogares que residen en ella.

La medición comprende el período 2016-2025 y utiliza información procedente de estadísticas oficiales nacionales, encuestas de hogares, registros vitales, relevamientos educativos y registros administrativos. La combinación de fuentes

permite cubrir las cuatro dimensiones, aunque sus diferentes periodicidades pueden requerir procedimientos de armonización temporal, interpolación o estimación para completar algunos años de la serie.

Año inicial y horizonte temporal

El año 2016 constituye el punto de partida de la serie del IPN, por ser el primer año para el cual se dispone de información suficientemente homogénea y comparable en las cuatro dimensiones. Esta elección también permite incorporar de manera regular los resultados de las evaluaciones educativas estandarizadas y construir una trayectoria común para todas las jurisdicciones.

Los parámetros empleados para normalizar los indicadores combinan referencias normativas y valores observados en las series disponibles, según la naturaleza de cada variable. Una vez definidos, esos umbrales permanecen constantes durante todo el período. Esta decisión permite que las variaciones interanuales reflejen cambios en los indicadores subyacentes y evita que una recalibración anual de la escala modifique artificialmente las posiciones o las distancias entre jurisdicciones. La serie permite observar la situación más reciente, los movimientos de corto plazo y la trayectoria acumulada desde 2016 bajo una métrica común.

Normalización y escala común

Los indicadores utilizados se expresan originalmente en unidades diferentes, como porcentajes, tasas o valores monetarios. Para integrarlos, se transforman en una escala común de referencia en la que los valores más elevados representan condiciones relativamente más favorables. Cuando el indicador tiene una orientación positiva —por ejemplo, asistencia escolar, terminalidad educativa o cobertura de vacunación—, la normalización se realiza mediante la siguiente expresión:

$$x_{p,t}^* = \frac{x_{p,t} - x_{min}}{x^{max} - x_{min}}$$

Donde $x_{p,t}$ representa el valor observado en la provincia p en el año t , mientras que x_{min} y x^{max} corresponden a los valores de referencia (umbrales) definidos para ese indicador. Los umbrales inferior y superior constituyen referencias explícitas que fijan los valores 0 y 1 de la escala. En algunos indicadores responden a

valores normativos, como la cobertura universal o la ausencia del fenómeno adverso; en otros corresponden a los mejores y peores registros observados en las series disponibles. La utilización de parámetros constantes permite comparar jurisdicciones y años sin introducir cambios en la métrica derivados de la distribución particular de cada período.

La escala debe interpretarse como una medida relativa construida a partir de esos umbrales. Un valor de 0,6 no indica que el 60% de las niñas, niños y adolescentes se encuentre en una situación favorable ni que se haya alcanzado el 60% de una meta general. Expresa el resultado de una jurisdicción dentro de la escala definida para el indicador, la dimensión o el índice.

Agregación y formulación del índice

Una vez normalizados los indicadores, la agregación se realiza mediante medias aritméticas simples, tanto dentro de cada dimensión como en la integración final del índice. Cada indicador dentro de su dimensión y cada dimensión en el índice sintético reciben igual ponderación, en línea con el criterio de transparencia adoptado en el diseño. Formalmente, si $x_{j,p,t}$ representa el indicador j normalizado correspondiente a la provincia p en el año t , la dimensión k se calcula como:

$$D_{k,p,t} = \frac{1}{n_k} \sum_{j=1}^{n_k} x_{j,p,t}^*$$

Donde n_k es el número de indicadores que componen la dimensión k . El índice sintético provincial se define entonces como:

$$IPN_{p,t} = \frac{1}{4} (D_{1,p,t} + D_{2,p,t} + D_{3,p,t} + D_{4,p,t})$$

Donde, D_1 , D_2 , D_3 y D_4 corresponden respectivamente a economía (1), educación (2), salud (3) y violencia (4). El valor resultante resume el desempeño promedio relativo de cada provincia en las cuatro dimensiones consideradas, sin introducir penalizaciones explícitas por desequilibrios entre ellas. Esta elección es consistente con el carácter descriptivo y comparativo del índice y facilita su interpretación tanto en términos de ordenamiento relativo como de magnitudes de brecha, dado que la escala normalizada permite cuantificar diferencias cardinales dentro de un rango estable.

Indicadores y umbrales

Esta versión del IPN comprende cuatro dimensiones y reúne indicadores seleccionados por su relevancia conceptual, disponibilidad territorial, continuidad temporal y comparabilidad. La Tabla 1 presenta los indicadores, su orientación y los umbrales empleados para su normalización.

TABLA 1. Información básica para la construcción del índice

Dimensión/ Indicadores	Fusiones	Unidad de medida	Sentido de las condiciones	Mínimo	Máximo
Condiciones de vida (generales)					
Ingreso familiar per cápita HCN		Logaritmo	Más alto=mejor	1 CBA	12 CBA
Pobreza monetaria extrema infantil		Proporción	Más bajo=mejor	0	0,499
NNyA en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI)		Proporción	Más bajo=mejor	0	0,368
Educación					
Asistencia					
Asistencia 3-4	Asistencia	Proporción asistencia	Más alto=mejor	0,5	1
Asistencia 15-17			Más alto=mejor		
Terminalidad secundaria			Más alto=mejor	0,4	1
Calidad					
Desempeño lengua	Desempeño	Nivel satisfactorio o más	Más alto=mejor	0,218	0,652
Desempeño Matemática					
TICS: Uso de computadora		Proporción	Más alto=mejor	0,178	0,735
Salud					
Mortalidad infantil evitable		Por mil nacimientos	Más bajo=mejor	0,1	15
Cobertura vacuna Quíntuple/Séxtuple 3° Dosis (6 meses)		Proporción	Más alto=mejor	0,395	1,122
Nacimientos de bajo peso		Proporción	Más bajo=mejor	0,055	0,098
Violencia					
Embarazo de niñas menores de 15 años		Proporción	Más bajo=mejor	0	0,125

Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes.



La dimensión **Condiciones materiales** incorpora el ingreso familiar per cápita de los hogares con niñas, niños y adolescentes, la pobreza monetaria extrema y la proporción de niñas, niños y adolescentes residentes en hogares con necesidades básicas insatisfechas. El ingreso se expresa en logaritmos y se relaciona con el valor de las canastas básicas. Sus umbrales corresponden a un mínimo equivalente a una canasta básica y a un máximo de doce canastas, conformando un rango de referencia explícito. La pobreza monetaria extrema y las necesidades básicas insatisfechas tienen orientación negativa: valores más elevados representan condiciones menos favorables.



La dimensión **Educación** reúne cuatro componentes: asistencia, calculada como el promedio simple de las tasas correspondientes a las edades de 3-4 y 15-17 años; finalización de la escuela secundaria; desempeño en Lengua y Matemática, medido mediante la proporción de estudiantes que alcanza el nivel satisfactorio o superior; y uso de computadora. En asistencia y terminalidad, el valor superior representa la cobertura universal y el inferior corresponde al peor registro de la serie disponible. En los componentes de aprendizaje y acceso digital, los valores más elevados indican condiciones relativamente más favorables.



La dimensión **Salud** comprende la mortalidad infantil evitable, la proporción de nacimientos con bajo peso y la cobertura de vacunación Quíntuple/Séxtuple - 3° Dosis, correspondiente a los 6 meses de edad. Los dos primeros indicadores tienen orientación negativa, por lo que una reducción incrementa el valor normalizado. Sus umbrales se establecen a partir de valores aspiracionales y de los extremos observados en las series disponibles. Para la vacunación se utilizan como referencias los valores definidos en la Tabla 1, manteniéndolos constantes durante todo el período.



La dimensión **Violencia** incorpora, en esta versión, un único indicador: el embarazo de niñas menores de 15 años. Su inclusión responde a la asociación de este fenómeno con relaciones desiguales de poder, restricciones en el acceso efectivo a derechos sexuales y reproductivos, interrupciones educativas y limitaciones en las oportunidades sociales. Debido a que esta dimensión se encuentra representada por un solo indicador, sus resultados deben interpretarse específicamente como una aproximación a la evolución del embarazo de niñas menor de 15 años y no como una medición integral de todas las formas de violencia que pueden afectar a niñas, niños y adolescentes. Cabe señalar que en esta dimensión se carece de otras fuentes de datos que permitan establecer indicadores desagregados geográficamente y actualizados de manera periódica.

Anexo 2

Dimensiones por provincia (2025)



DIMENSIÓN 1: Condiciones materiales



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.



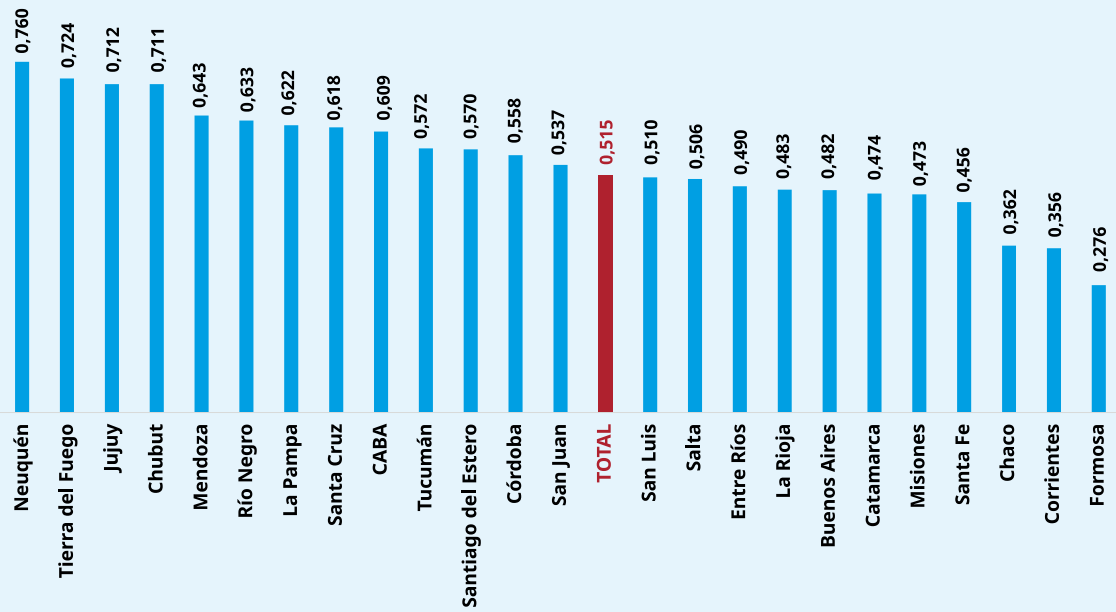
DIMENSIÓN 2: Educación



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.



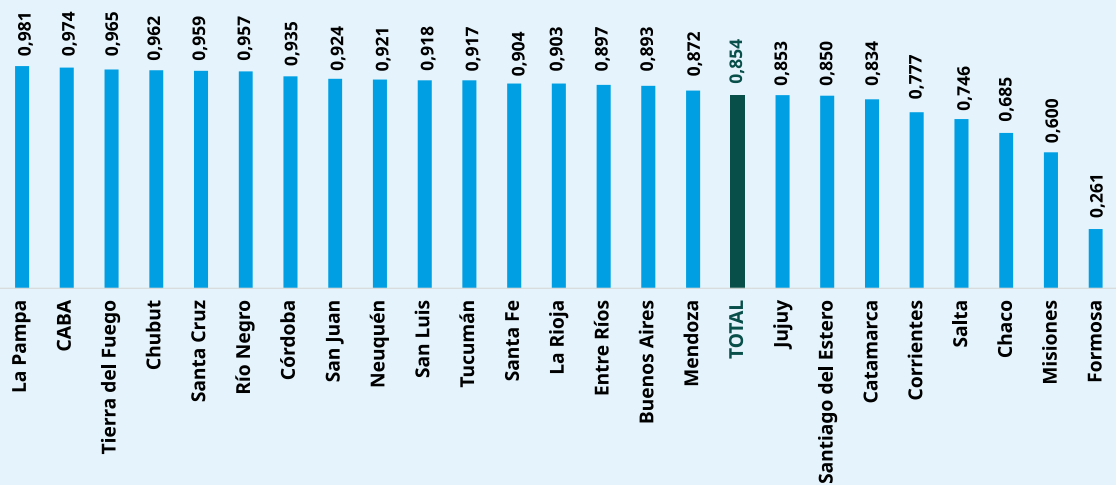
DIMENSIÓN 3: Salud



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.



DIMENSIÓN 4: Violencia



Fuente: Elaboración propia en base a múltiples fuentes oficiales.

